

125-19.61

RESPUESTA A DENUNCIA CIUDADANA

Santiago de Cali,

Señor
ALBERTO JAVIER RIVERA VALENCIA
C.C. N°1.116.130.830
Dirección: Calle 4 N°7-30 Barrio Monserrate
Versalles Valle del Cauca

ASUNTO:	Remisión respuesta de fondo a Denuncia Ciudadana CACCI 996 DC-23-2020 del 12 de febrero de 2020.
----------------	--

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, recibió la denuncia ciudadana del asunto, que fue identificada bajo el radicado CACCI 996 DC-23-2020 del 12 de febrero de 2020, en la que se expusieron presuntas irregularidades acaecidas en el HOSPITAL SAN NICOLAS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VERSALLES – VALLE, de acuerdo a lo que a continuación se extrae:

“PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACION EN LA IPS HOSPITAL SAN NICOLAS ESE DEL MUNICIPIO DE VERSALLES, ADEMAS DE OTRAS FALENCIAS ADMINISTRATIVAS Y FISCALES ACAECIDAS EN LA VIGENCIA 2019, REFERENCIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 007-2019.”

Con ocasión de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del COVID-19, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca expidió la Resolución No. 266 del 16 de marzo de 2020, Resolución No. 277 del 17 de marzo de 2020, Resolución No. 287 del 24 de marzo de 2020, Resolución No. 296 del 8 de abril de 2020, Resolución No. 312 del 24 de abril de 2020, Resolución No. 324 del 07 de mayo de 2020, Resolución No. 330 del 22 de mayo de 2020 y la Resolución N. 339 del 29 de mayo de 2020, por medio de las cuales se suspendieron los términos para los trámites de las denuncias ciudadanas, derechos de contradicción y demás, desde el días 16 de marzo de 2020 hasta el 01 de julio de 2020.

A través de la Resolución No. 387 del 01 de julio de 2020, se reanudaron los términos para los procesos y procedimientos a cargo de la Dirección Operativa de Participación Ciudadana a partir del **06 de julio de 2020**, reiniciando el trámite de las denuncias ciudadanas, por lo cual se está dentro del término legal para dar respuesta de fondo al ciudadano.

Ahora bien, con el fin de indagar a fondo sobre la denuncia impetrada por el ciudadano, y verificar que efectivamente los hechos denunciados tuvieran connotación de tipo fiscal, se realizó por parte de la Dirección los siguientes trámites:



1. Análisis del Contrato de prestación de servicios No. 007-2019

De ese modo, es trascendental referir que, la documentación obtenida por la Contraloría Departamental del Valle, es necesaria, pertinente y conducente para emitir respuesta de fondo respecto de la denuncia ciudadana tramitada por ésta Dependencia.

Así las cosas, de la revisión de los hechos denunciados con las evidencias documentales recaudadas, se puede expresar que el alcance dado al presente informe, contiene el análisis del contrato estatal, de acuerdo a la competencia de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, por lo que los demás hechos enunciados, desbordan la competencia de este ente de control, y deberán ser analizados por la Procuraduría General de la Nación.

Ahora bien, respecto del hecho *“cabe anotar que la irregularidad de la firma del contrato en el mes de febrero pero con fecha de enero me trajo inconvenientes con el servicio de salud, ya que al pagar y estando afiliado con una cooperativa la cual ellos pagaban directamente a la E.P.S, pero al ingresar como Independiente, esta información fue omitida por el funcionario encargado y nos quedamos desvinculados del sistema de salud por el mes de enero y parte del mes de febrero vulnerando los derechos a la salud tanto míos como de mi familia, en ese momento tuve un accidente y el hospital no me quiso responder por la incapacidad y lo que dijeron es que ellos no podían responder sino la E.P.S. (...)”*

Frente a lo anterior, de la revisión del contrato, se puede evidenciar que los estudios previos se efectuaron desde el mes de diciembre de 2018, en los cuales se establecieron la necesidad de la contratación, conveniencia, costo beneficio y demás aspectos fundamentales, indicando esto, que la contratación tuvo si debida planeación de acuerdo a la normatividad establecida.

Por otro lado, se observa en la carpeta contractual que el contrato fue suscrito el 02 de enero de 2020, con fecha de inicio del mismo día, pero no se logró evidenciar una firma posterior del contrato conforme a lo manifestado por el denunciante, pues la formalidad que se encuentra consignada en la carpeta contractual denota que el contrato estatal fue suscrito en el mes de enero y no febrero como refiere el denunciante.

Se pudo evidenciar que el contrato fue pagado en debida forma y de acuerdo al comprobante de pago de fecha 31 de enero, 14 de marzo, 11 de abril, 26 de abril, 11 y 28 junio, 30 julio, 02 de septiembre, 03 de octubre, 05 de noviembre, 03 de diciembre y 27 de diciembre, lo anterior tiene sustento en la información remitida el 11 de noviembre de 2020.

También se observó que el Hospital realizó un seguimiento adecuado a cada una de las actividades establecidas en el contrato de prestación de servicios.

Ahora bien, teniendo en cuenta el hecho referido por el denunciante, en cuanto a que el Hospital no respondió por su incapacidad, evidencia este ente de control que, el señor ALBERTO JAVIER RIVERA VALENCIA, tenía relación contractual con el Hospital mediante contrato de prestación de servicios, lo que indica que era la EPS, quien debía asumir el pago de la incapacidad, de acuerdo a lo establecido en la normatividad del asunto.

De la información contractual, se pudo observar que el contrato inicialmente suscrito tuvo un plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2019, y posteriormente, se pudo vislumbrar que se suscribió otrosí N°01 el 30 de agosto de 2019, y contó con la correspondiente acta de liquidación del 31 de enero de 2020



Lo anterior, indica claramente que el contrato fue adicionado en tiempo, desde el 30 de agosto de 2019 al 31 de diciembre de 2019, por lo que en virtud del principio de la buena fe que rigen las actuaciones procesales se les brinda el valor probatorio que merecen, pues tales documentos, permiten establecer que las adiciones fueron suscritas dentro del término, y no posteriormente, primando la realidad sobre la formalidad.

De ese modo, el Despacho del análisis de la información, no evidencia que exista mérito para proceder al traslado de la denuncia a la Dirección Operativa de Control Fiscal, toda vez que, con la documentación allegada por el sujeto de control, se colige que; no se evidenciaron irregularidades de tipo fiscal, que puedan ser determinadas, cuantificables, ciertas, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 125 y 126 del Decreto 403 de 2020.

Es importante tener en cuenta lo esgrimido por el Honorable Consejo de Estado en Sentencia con radicado N° 68001-23-31-000-2010-00706-01 del dieciséis (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017), Consejera Ponente MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLE, que respecto a ello ha expresado:

“(…)
RESPONSABILIDAD FISCAL - Daño patrimonial Es indispensable que se tenga una certeza absoluta con respecto a la existencia del daño patrimonial, por lo tanto es necesario que la lesión patrimonial se haya ocasionado realmente, esto es, que se trate de un daño existente, específico y objetivamente verificable, determinado o determinable y ha manifestado en diferentes oportunidades que la responsabilidad fiscal tiene una finalidad meramente resarcitoria y, por lo tanto, es independiente y autónoma, distinta de la responsabilidad penal o disciplinaria (Subrayado fuera del texto original) *que pueda corresponder por la misma conducta, pues lo que en el proceso de responsabilidad fiscal se discute es el daño patrimonial que se causa a los dineros públicos, por conductas dolosas o culposas atribuibles a un servidor público o persona que maneje dichos dineros, lo que significa que el daño patrimonial debe ser por lo menos cuantificable en el momento en que se declare responsable fiscalmente a una persona. En el presente caso, no existe duda, ni siquiera por parte de la actora de que en efecto hubo un daño patrimonial al Estado [...]. (...)”*

Todo lo anterior, le permite concluir a la Dirección Operativa de Participación Ciudadana de la Contraloría Departamental del Valle, que no se evidenció circunstancias irregulares que conllevara a predicar la existencia de un presunto daño patrimonial a las arcas del Estado, por las consideraciones esbozadas.

De esta manera queda debidamente formalizado el diligenciamiento de la denuncia ciudadana No. **DC-23-2020** la cual se procede dejar en conocimiento de las partes interesadas.

Se remite copia de esta respuesta final al sujeto de control HOSPITAL SAN NICOLÁS E.S.E. VERSALLES VALLE DEL CAUCA con el fin de que la entidad tenga conocimiento del mismo y quede debidamente notificada.

Finalmente, se le agradece su acción en beneficio del interés general y se le exhorta a ser partícipe, del control social articulado con el fiscal, a través de la presentación de denuncias, por los distintos medios de recepción de la C.D.V.C., entre ellos, la página web institucional www.contraloriavalledelcauca.gov.co y al correo electrónico contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co, dando a conocer un relato preciso de los hechos o irregularidades fiscales detectas, con una descripción puntual de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los mismos, en relación con el uso indebido de los recursos públicos, la mala prestación de los servicios públicos en donde se administren recursos públicos y sociales, la inequitativa inversión pública o el daño al medio ambiente, que ameriten






credibilidad o que se encuentren soportadas en medios probatorios que permitan iniciar la acción de competencia fiscal,

Cordialmente,

Martha Isabel Gutiérrez Segura
MARTHA ISABEL GUTIÉRREZ SEGURA
DIRECTORA OPERATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Copia: C.C. Contáctenos Contraloría <contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co.
Archivo DOPC CACCI DC-23-2020
Copia: HOSPITAL SAN NICOLÁS E.S.E. VERSALLES: gerente@hospitalsannicolasese.org / eseversalles@gmail.com
Copia Personería de Versalles: personeria@versalles-valle.gov.co
Copia: Procuraduría Provincial de Cartago: provincial.cartago@procuraduria.gov.co / mcarrasquilla@procuraduria.gov.co

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Sara Natalia León Scarpeta	Profesional Universitaria	
Revisó	Martha Isabel Gutiérrez Segura	Directora Operativa de Participación Ciudadana	
Aprobó	Martha Isabel Gutiérrez Segura	Directora Operativa de Participación Ciudadana	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigente y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

M2P4-05	Versión: 2.0
---------	--------------